



SENTENCIA.- En Hermosillo, Sonora, a once de mayo del año dos mil veintitrés.

VISTOS para resolver en definitiva los autos originales del expediente número RO/35/23, instruido en contra de la presunta responsable [REDACTED]

[REDACTED] Servicios de Salud del Estado de Sonora, por la presunta comisión de la FALTA ADMINISTRATIVA NO GRAVE establecida en el artículo 88 fracción IV de la Ley Estatal de Responsabilidades y:

ANTECEDENTES:

1. El día veinte de enero del año dos mil veintitrés, se recibió Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) y Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa, presentado por la Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud Pública y de los Servicios de Salud de Sonora, en contra de la presunta responsable (Páginas 01 a la 83), mismo que se tuvo por admitido el día veinticuatro de enero del año dos mil veintitrés (Páginas 85 a la 89), ordenándose emplazar formal y legalmente a la presunta responsable, lo que aconteció el día uno de marzo de dos mil veintitrés (Páginas 107 a la 123).

2. El día veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia inicial en el procedimiento en que se actúa, haciéndose constar la incomparecencia de la encausada (Páginas 137 a la 140) y derivado de dicha incomparecencia, se tuvieron por ofrecidas las pruebas solo a la denunciante, se declaró cerrado el término para ofrecer las pruebas, en atención a lo dispuesto por el artículo 248, fracciones V y VII de la Ley Estatal de Responsabilidades, mismas que fueron admitidas en auto dictado en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil veintitrés (Páginas 157 a la 160).

3. Desahogadas las pruebas admitidas y al no existir alguna pendiente de desahogar, mediante auto de fecha catorce de abril de dos mil veintitrés (Página 161), se declaró abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes. Hecho lo anterior, esta autoridad resolutora declaró visto el proceso y citó la causa a oír sentencia definitiva, misma que ahora se pronuncia:

CONSIDERANDO:

I. COMPETENCIA

Esta Coordinación Ejecutiva es competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo sancionador conforme a lo dispuesto por el artículo 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con relación en los artículos 3, fracciones IV y XXV de la Ley Estatal de Responsabilidades; 26 apartado C,

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 11 fracción I, del Reglamento Interior aplicable de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.

II. HECHOS CONTROVERTIDOS

Se advierte que la autoridad investigadora, formuló Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa por los hechos en él señalados (Páginas 01 a la 13), los cuales consisten medularmente en que la presunta responsable, omitió rendir su declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de modificación dos mil veintiuno, en tiempo y forma, a pesar de estar legalmente obligada para ello, hecho el cual la autoridad investigadora calificó como falta administrativa no grave, prevista por el artículo 88, fracción IV, de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Síntesis de hechos que se realiza en aplicación por analogía de la Tesis de Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: **“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”¹**

Por su parte la [REDACTED], no compareció a la audiencia inicial (Páginas 137 a la 140), aun cuando fue emplazada personalmente para ello (Páginas 107 a la 123), en los precisos términos indicados por los artículos 248 fracciones II y III de la Ley Estatal de Responsabilidades; 39 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado y 171 fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia administrativa que nos ocupa; no se vertieron entonces, argumentos de defensa, quedando sólo a su favor, la presunción de inocencia que la Ley le otorga en los artículos 151 y 175 de la aludida Ley Estatal de Responsabilidades.

Ahora bien, como se advierte de los antecedentes de esta sentencia y acatando el derecho de audiencia consagrado por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como también el contenido del artículo 248 fracciones III, V y VII de la Ley Estatal de Responsabilidades, esta Coordinación Ejecutiva, respetó en su integridad el derecho a una debida defensa de la encausada, al hacerle saber de manera personal y directa los hechos presuntamente constitutivos de sanción administrativa; así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas a su favor y presentar alegatos por sí o por medio de defensor que para el caso designare; dándole a conocer que las imputaciones en su contra, derivan de los hechos consignados en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (Páginas 01 a la 13) y sus anexos (Páginas 15 a la 83), con las cuales se le corrió traslado en la diligencia de emplazamiento.

¹ Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Re Materias(s): Común, Tesis: 2a. /J. 58/2010, Fue XXXI, Mayo de 2010, Página 830, Tipo: Jurisprud.*

Segunda Sala, Novena Época, Consolidación y su Gaceta. Tomo

Del mismo modo, se respetó el debido proceso, previsto en el artículo 130 de la Ley Estatal de Responsabilidades y enmarcado como un principio universal reconocido en nuestro sistema jurídico, integrado y armonizado al mismo, al ser reconocido en los instrumentos internacionales ratificados por México y parte del sistema internacional de derechos humanos, por las consideraciones que en adelante se explican; lo anterior, en reconocimiento al principio del debido proceso como garante de la legalidad y la correcta aplicación de las leyes en el marco del respeto a la dignidad humana en cualquier tipo de proceso (incluyendo el administrativo disciplinario); de tal forma, que constituye uno de los presupuestos indispensables para el sistema de protección de los derechos humanos y su efectividad.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que el debido proceso "...abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos y obligaciones están bajo consideración judicial..."; señalando que su aplicación "...no se limita a los recursos judiciales en un sentido estricto, 'sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales' a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos...", lo que implica que la actuación de los órganos estatales dentro de un proceso jurisdiccional o de cualquier naturaleza, se realice en condiciones de igualdad.

100588

FORIA GE...
Sustanc...
asabli...

De tal manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del caso Cabrera y Montiel Flores Vs. México, del veintiséis de noviembre del dos mil diez, estableció que: "...140. El artículo 8.1 de la Convención consagra los Lineamientos del llamado 'debido proceso legal', que implica, entre otras cosas, el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por el Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la Ley para la determinación de sus derechos..."

En ese tenor, es aplicable la Tesis número 1a. XIII/2012 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página 650, Libro V, Febrero 2012, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo contenido es el siguiente:

“...
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. EFECTOS DE SUS SENTENCIAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. El Estado Mexicano se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de diciembre de 1998, mediante declaración unilateral de voluntad que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999. En ese sentido, los artículos 133 y 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen la vigencia de los tratados internacionales en nuestro ordenamiento jurídico interno y establecen la obligación de las autoridades nacionales de aplicar los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales vigentes en nuestro país. Por lo anterior, la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generan como una consecuencia ineludible que las sentencias emitidas por dicho Tribunal

Internacional, en aquellos casos en los cuales México haya sido parte en el juicio, resulten obligatorias para el Estado mexicano, incluidos todos los jueces y tribunales que lleven a cabo funciones materialmente jurisdiccionales. Esta obligatoriedad alcanza no sólo a los puntos resolutive de las sentencias en comento, sino a todos los criterios interpretativos contenidos en las mismas..."

Es de precisarse que el debido proceso se instrumentaliza en el procedimiento mediante las formalidades esenciales reconocidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que conlleva los siguientes parámetros mínimos:

1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias.
2. La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas.
3. La oportunidad de alegar.
4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas y;
5. Acceso a un recurso efectivo.

Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia número 1.a/J.11/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 28 Febrero del 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro número 2005716, misma que a la letra dice:

“...
DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: **"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."**, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (I) la notificación del inicio del procedimiento; (II) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (III) la oportunidad de alegar; y, (IV) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja



frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.

En ese orden de ideas, se tiene que, en el caso que nos ocupa, se cumplió cabalmente con el debido proceso, establecido en el artículo 130 de la Ley Estatal de Responsabilidades, al obrar dentro del presente expediente, constancias que acreditan el debido emplazamiento personal de la [REDACTED] acaecido el día uno de marzo de dos mil veintitrés (Páginas 107 a la 123), emplazamiento personal, a través del cual, se hizo de su conocimiento, entre otras cosas, los señalamientos de responsabilidad y hechos imputados en su contra, consignados en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y anexos (Páginas 01 a la 83); se le corrió traslado con copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente; de igual forma, se hizo de su conocimiento el derecho a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor perito en la materia y se le enteró, que de no contar con un defensor, le sería asignado un defensor de oficio; se hizo de su conocimiento, su derecho de ofrecer pruebas y también de alegar lo que sus intereses conviniera; asimismo, se citó a la [REDACTED], señalándosele hora, fecha y lugar ciertos para que compareciera al desahogo de la **audiencia inicial** a su cargo, prevista por el artículo 248 fracción V de la Ley Estatal de Responsabilidades.

No obstante, esta autoridad no pasa desapercibido, que con posterioridad al cierre del período para ofrecer pruebas durante el desahogo de la audiencia inicial (celebrada a las once horas del día veintitrés de marzo de dos mil veintitrés) mencionada en párrafos anteriores; a las once horas con cuarenta y tres minutos del mismo día de la celebración de la mencionada audiencia, la [REDACTED], presentó escrito y anexos respectivos (Páginas 143 a la 153) ante esta Coordinación Ejecutiva, lo cual consta con sello de recibido de esta autoridad, mediante el cual realizó diversas manifestaciones, escrito que se atendió a través del auto de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintitrés (Páginas 155 a la 156), en el que se determinó que se estuviese a lo decretado en la aludida audiencia, siendo esto lo que a la letra dice: **"se declara por cerrado el termino para realizar su declaración por escrito o verbalmente, así como el ofrecimiento de las pruebas que estime necesarias para su defensa, lo anterior en observancia a lo dispuesto por el artículo 248 fracción V de la Ley Estatal de Responsabilidades."**

En virtud de lo anterior y por las determinaciones establecidas durante el desahogo de la audiencia inicial que nos ocupa, esta resolutoria al resolver la presente causa: I.- No se encuentra en posibilidades de tomar en cuenta las manifestaciones y pruebas ofrecidas por la encausada, pues estas últimas no encuadran en los supuestos que enmarcan la calidad de pruebas supervenientes, siendo éstas las únicas que pudieran ser ofertadas y su caso admitidas con posterioridad al desahogo de la audiencia inicial.

No está demás precisar, que para que esta autoridad estuviese en aptitud de considerar las manifestaciones y pruebas en cuestión al resolver la presente causa, éstas

000170

debieron ser ofrecidas antes o durante la celebración de la audiencia inicial llevada a cabo a las **once horas del día veintitrés de marzo de dos mil veintitrés**; lo anterior así, por ser formalmente una carga procesal de las partes, según lo dispone el ordenamiento jurídico que rige el presente procedimiento de responsabilidad administrativa, siendo éste la Ley Estatal de Responsabilidades, específicamente lo establecido en la fracción V del artículo 248 de la ley en cita².

III. ESTUDIO DE FONDO

La Autoridad Investigadora denunció por la falta administrativa prevista en el artículo 88, fracción IV, de la Ley Estatal de Responsabilidades, preceptos normativos que a la letra dicen:

“Artículo 88.- Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

(...)

IV.- Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, en los términos establecidos por esta Ley y observando la normatividad correspondiente a la reserva o confidencialidad de datos personales;”

En ese sentido, tenemos que, comete una falta administrativa no grave, el servidor público que dejare de presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, en los términos establecidos por la Ley Estatal de Responsabilidades y observando la normatividad correspondiente a la reserva o confidencialidad de datos personales.

Así, los elementos que integran la falta administrativa en cita son los siguientes:

- a) **Que el sujeto activo tenga el carácter de servidor público;**
- b) **Que tenga la obligación de presentar su declaración patrimonial y**
- c) **Que haya incumplido en el tiempo y forma establecida para la presentación de tal declaración.**

El **primer elemento se acredita** con las **DOCUMENTALES PÚBLICAS** agregada a autos, consistentes en: original de **CONSTANCIA DE SERVICIOS** emitida el día siete de diciembre de dos mil veintiuno, de la cual se advierte que la presunta responsable en los últimos años, desempeñó el cargo de [REDACTED] **Servicios de**

² *“artículo 248.- En los asuntos relacionados con faltas administrativas no graves, se deberá proceder en los términos siguientes:*

[...]

V.- El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley; [...].”

Salud del Estado de Sonora, del día uno de julio del año mil novecientos noventa y cinco a la fecha de emisión de la citada hoja de servicio (Página 43); copia certificada del **NOMBRAMIENTO** a favor de la [REDACTED]

[REDACTED] **Servicios de Salud del Estado de Sonora**, emitido el día cinco de abril del año dos mil dieciocho, del cual se advierte que la fecha de ingreso a la dependencia, fue el día uno de julio del año mil novecientos noventa y cinco (Páginas 47 a la 49). Documental que merece pleno valor probatorio al tenor de los artículos 171 y 173 de la Ley Estatal de Responsabilidades. **Lográndose acreditar con ello, el carácter de servidora pública de la presunta responsable.**

El **segundo elemento** en relación con los artículos 33 y 34, fracción III, de la Ley Estatal de Responsabilidades, **se acredita** con la **DOCUMENTAL PÚBLICA** consiste en el oficio número **CGOIC-109-2021** y anexos, suscrito por la Coordinadora General de Órganos Internos de Control de la Secretaría de la Contraloría General (Páginas 21 a la 27), mediante el cual remite a la Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud del Estado de Sonora y la Secretaría de Salud Pública, el listado de los servidores públicos omisos de esa dependencia, listado dentro del que se encuentra el nombre de la presunta responsable quien fue omisa en presentar la declaración de modificación dos mil veintiuno. Documental que merece pleno valor probatorio al tenor de los artículos 171 y 173 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

En este tenor, los artículos 33 y 34, fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades, a la letra dicen:

“Artículo 33.- *Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.”*

“Artículo 34.- *La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:*

(...)

II.- Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año;

(...)

Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas correspondientes y se requerirá por escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación.

(...)

El incumplimiento por no separar del cargo al servidor público por parte del titular de alguno de los entes públicos, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley.

Para el caso de omisión, en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere notificado el requerimiento al Declarante, la Secretaría o los Órganos Internos de Control, según corresponda, declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin



ALC
de S.
onsa

000172

efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del ente público correspondiente para separar del cargo al servidor público.

Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas administrativas previsto en la presente ley."

Acuerdo publicado en el Boletín Oficial, Tomo CCVIII, Número 9, Sección II, del veintinueve de julio del año dos mil veintiuno

Artículo primero.- *Se reconoce como causa justificada por los motivos y efectos citados en los considerandos del presente acuerdo derivados de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus SAR-CoV2 (COVID-19), la no presentación de la declaración patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación durante el mes de mayo 2021, como lo prevén los artículos 33 fracción II y 48 párrafo segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 34 fracción II y 49 párrafo segundo de la Ley Estatal de Responsabilidades, por lo que podrá presentarse la declaración de referencia sin responsabilidad hasta el día 30 de septiembre de 2021."*

De forma que, es válido sostener que era obligación de todo servidor público el presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de modificación 2021, del primero de mayo al treinta de septiembre del dos mil veintiuno, lo anterior, tomando en cuenta la ampliación del plazo de presentación, derivado de los Acuerdos por los que se tiene como causa justificada, la no presentación de las declaraciones de situación patrimonial y la de intereses, en los plazos previstos en los artículos 33 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 34 y 39 de la Ley Estatal de Responsabilidades, por la Emergencia Sanitaria derivada de la enfermedad generada por el Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19) publicados en los Boletines Oficiales del Estado de Sonora, número 43, Secc. I del treinta y uno de mayo del dos mil veintiuno y número 9, Secc. II del veintinueve de julio de ese mismo año.

En este tenor, la presunta responsable tenía la obligación como servidora pública de presentar su declaración de modificación 2021, **entre el primero de mayo y el treinta de septiembre de dos mil veintiuno.**

El **tercer elemento**, consistente en el **incumplimiento** de la presunta responsable con la obligación antes precisada, quedó debidamente **acreditada** en autos del expediente.

Lo anterior es así, en virtud de las **DOCUMENTALES PÚBLICAS** consistentes en oficio **CGOIC-109-2021**, que contiene anexo el oficio número **CESRRSP/02947/2021** (Páginas 21 a la 27), del trece de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el entonces Coordinador Ejecutivo de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial, de esta Secretaría, mediante el cual remite el listado de los servidores públicos omisos de los Servicios de Salud del Estado de Sonora y la Secretaría de Salud Pública, listado en el que se encuentra el nombre de la presunta responsable, quien fue omisa en presentar la declaración de modificación dos mil veintiuno; **teniendo que la autoridad en cita, informó a la Coordinadora General de Órganos Internos de Control que entre otros, la presunta responsable había incumplido con su obligación de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de modificación 2021, lo cual motivó el origen de la indagatoria correspondiente.** Documentales que

merecen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 171 y 173 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Es por lo anteriormente vertido que, la autoridad investigadora **requirió** a la presunta responsable el cumplimiento a su obligación mediante oficio número **OIC-SSS-DJ-151-2022**, requerimiento que le fue debidamente notificado a las diez horas con cuarenta y un minutos del día diez de febrero del año dos mil veintidós (Páginas 55 a la 57). Actuación que merece valor probatorio pleno al ser una **DOCUMENTAL PÚBLICA** generada por una autoridad competente con motivo de sus funciones en términos de los artículos 171 y 173 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

De forma que, una vez requerida la presunta responsable, para el cumplimiento de su obligación, ésta **no presentó** su declaración de situación patrimonial y de intereses en un periodo de treinta días posteriores a la fecha de notificación, tal y como se desprende de la **DOCUMENTAL PÚBLICA** agregada a autos, consistente en el Oficio número **DGVAP/1153/2022**, de fecha doce de julio de dos mil veintidós, suscrito por el Director General de Verificación y Análisis Patrimonial, con el cual manifiesta que a la fecha de realización del comentado oficio la [REDACTED] no había presentado su declaración de situación patrimonial y de intereses en su modalidad de modificación 2021 (Página 63), documento con el que se corrobora que la misma **no la presentó en tiempo y forma en los plazos que la Ley Estatal y el acuerdo publicado en el Boletín Oficial, Tomo CCVIII, Número 9, Sección II, del veintinueve de julio del año dos mil veintiuno, contemplan para su presentación.** Documentales que merecen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 170, 171 y 173 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

INCIDENTOS
ALOP
e Su.
onsal

En consecuencia, se estiman **acreditados los elementos** de la falta administrativa no grave consistente en incumplir con la obligación de presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de modificación 2021, toda vez que la autoridad investigadora demostró que la presunta responsable, en su carácter de servidora pública, estaba obligada legalmente a presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses, en su modalidad de modificación 2021, entre el **uno de mayo del año dos mil veintiuno al treinta de septiembre del año dos mil veintiuno** y fue omisa en presentarla en tiempo y forma, en términos de lo establecido por el artículo 34, fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Luego, al no obrar alguna probanza a favor de la presunta responsable y al haberse superado la presunción de inocencia de la misma prevista en el artículo 175 de la Ley Estatal de Responsabilidades y atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, de acuerdo al artículo 171 de la ley en cita, es claro que la **conducta imputada quedó plenamente acreditada.**

En consecuencia, se tiene por acreditada la **FALTA ADMINISTRATIVA NO GRAVE** establecida en el **ARTÍCULO 88 FRACCIÓN IV DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES.**

De todo lo antes señalado, se advierte que **existen tres elementos que le perjudican al individualizar la sanción.**

Ahora, el artículo 115 de la Ley Estatal de Responsabilidades prevé por la comisión de **Faltas Administrativas No Graves**, las siguientes sanciones:

“Artículo 115.- En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia del Tribunal, la Secretaría o los Órganos Internos de Control impondrán las sanciones administrativas siguientes:

- I.- Amonestación pública o privada;*
- II.- Suspensión del empleo, cargo o comisión;*
- III.- Destitución de su empleo, cargo o comisión; y*
- IV.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.*

La Secretaría y los Órganos Internos de Control podrán imponer una o más de las sanciones administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la falta administrativa no grave.

La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días naturales.

En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año.”

De forma que, considerando la mínima y la máxima de la sanción a imponer por la omisión atribuida, habiendo valorado los elementos de prueba que fueron aportados al procedimiento que se ventila y tomando en cuenta los factores establecidos en el artículo 116 de la Ley Estatal de Responsabilidades, esta autoridad estima justo y equitativo, imponer la sanción de **AMONESTACIÓN PÚBLICA**, en contra de la responsable, lo anterior de conformidad con la fracción I del artículo 115 de la citada Ley Estatal de Responsabilidades.

V. FALLO

De la valoración de las pruebas conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, quedó plenamente acreditado que la presunta es responsable de cometer la **Falta Administrativa No Grave** prevista en el **Artículo 88, fracción IV** de la Ley Estatal de Responsabilidades; por lo tanto, se determina imponerle la sanción de **AMONESTACIÓN PÚBLICA**, previstas en la fracción I del artículo 115 de la citada Ley Estatal de Responsabilidades.

VI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con relación a los artículos 19 y 29 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta autoridad como Sujeto Obligado, ordena se publique la presente sentencia suprimiendo los datos personales de la responsable, en virtud de que no obra en autos,

000176

dato alguno que revele el consentimiento expreso, por escrito o por medio de autenticación similar, para que sus precitados datos personales puedan difundirse.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve al tenor de los siguientes:

RESOLUTIVOS:

PRIMERO. Esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, es y fue competente para conocer y resolver el presente procedimiento de responsabilidad administrativa, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando I de esta sentencia.

SEGUNDO. Conforme a lo establecido en el considerando III de la presente sentencia, en autos quedaron plenamente acreditados los elementos de la **FALTA ADMINISTRATIVA NO GRAVE** establecida en el **ARTÍCULO 88 FRACCIÓN IV DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES**, así como la plena responsabilidad de la [REDACTED] en su comisión; consecuentemente, se decreta la **EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA** en su contra.

TERCERO. Se le aplica al responsable la sanción de **AMONESTACIÓN PÚBLICA**, de conformidad con los artículos 115 fracción I y 116 de la Ley de la Materia, con relación al considerando IV de este fallo.

CUARTO. Se informa a la responsable que, en caso de reincidencia, se le impondrá una sanción mayor a la antes establecida, de conformidad con el último párrafo del artículo 116 de la Ley Estatal de Responsabilidades, el cual define la reincidencia como la comisión de una infracción del mismo tipo de otra ya cometida.

QUINTO. Se hace del conocimiento a la responsable que la presente sentencia puede ser impugnada a través del Recurso de Revocación previsto por el artículo 250 de la Ley Estatal de Responsabilidades y que para ello cuenta con un plazo de quince días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente.

SEXTO. En su oportunidad, previa ejecutoria de la presente sentencia, notifíquese a las autoridades correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar y posteriormente, archívese el presente expediente como asunto total y absolutamente concluido.

NOTIFÍQUESE con copia de la presente sentencia a la responsable mediante notificación personal, en el domicilio señalado para tal efecto, comisionándose para tal diligencia a los notificadores y a los testigos de asistencia quienes se encuentran adscritos a esta Coordinación.

Asimismo, hágase la publicación respectiva en la Lista de Acuerdos de esta Unidad Administrativa. Lo anterior con fundamento en el artículo 175 del Código de Procedimientos

Civiles del Estado de Sonora, en relación con el artículo 158 de la Ley Estatal de Responsabilidades, aplicado de manera supletoria al procedimiento que nos ocupa.

Así lo resolvió y firma el **Dr. Oswaldo Pacheco Camacho**, Coordinador Ejecutivo de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, ante los testigos de asistencia, con los que actúa y quienes dan fe. **DAMOS FE.-**

DR. OSWALDO PACHECO CAMACHO
Coordinador Ejecutivo de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades
de la Secretaría de la Contraloría General.



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación
y Resolución de Responsabilidades

LIC. MARIANA BERNAL BRICEÑO.



LIC. DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES

ONT...
tiva de S...
Respon...

Lista.- El 12 de mayo del 2023, se publica en Lista de Acuerdos la Sentencia que antecede. Conste.-

000178



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
COORDINACION EJECUTIVA DE SUSTANCIACION
Y RESOLUCION DE RESPONSABILIDADES
HERNANDEZ, SONORA

SIN TEXTO



Secretaría de la Contraloría

General

Coordinación Ejecutiva de Sustanciación
y Resolución de Responsabilidades

SIN TEXTO



SECRETARIA DE LA
COORDINACION EJECUTIVA
Y RESOLUCION DE